

Señores

**JUZGADO SEGUNDO (02) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI**

[of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E.S.D.

Asunto: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN DIRECTA DE VALERIA ZÚÑIGA VALENCIA EN CONTRA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

Rad: 76001333300220220019900

Maria Claudia Romero Lenis, mayor de edad y vecina de Cali (V), identificada con la C.C. No. 38.873.416 de Buga, abogada en ejercicio, titular de la T. P. No. 83.061 del C. S. de la J.; actuando en el presente acto como Apoderada General de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., mediante el presente documento REASUMO el poder a mi conferido y, acto seguido, presento los alegatos de conclusión en representación de la aseguradora.

**CONSIDERACIONES.**

1. Tesis de la defensa.

En este escrito se expondrá un marco normativo y jurisprudencial relativo a la responsabilidad del Estado frente a los daños causados por la falta de mantenimiento de las vías públicas y se analizará la escasa actividad probatoria en este proceso, para concluir que no se acreditó la existencia de un nexo de causalidad entre los hechos narrados en la demanda como supuestos generadores del daño y este último. Lo anterior amparados en que no existen pruebas que permitan establecer con certeza que el accidente fue causado por un hueco en la vía.

2. Marco Jurisprudencial.

En sentencia del 6 de febrero de 2020 emanada de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, (consejera ponente: María Adriana Marín), con radicación 17001-23-31-000-2008-00013-01(45546), este alto Tribunal reiteró la postura adoptada en Sentencia de 21 de septiembre de 2016 (expediente No. 42492) de la misma Corporación, en virtud del cual el Estado está obligado ejecutar los actos necesarios para el sostenimiento de la red vial, y concibió dos eventos en virtud de los cuales, inexorablemente, el Estado estará llamado a responder cuando *[...] incurra en omisión de sus tareas de conservación y mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura vial, responsabilidad que acarreará mayor exigencia si se demuestra que los daños u obstáculos permanecieron sobre una carretera durante un tiempo razonable para actuar, sin que la entidad demandada hubiera efectuado las obras de limpieza, remoción, reparación o señalización, con miras a restablecer la circulación normal en la vía, evento en el cual se deberán evaluar las condiciones y circunstancias del caso particular, con el fin de determinar la razonabilidad del tiempo, valoración que será más estricta si se llega a demostrar que el hecho anormal que presentaba la vía fue puesto en conocimiento de la accionada y que esta omitió el*

*cumplimiento de sus funciones; no obstante, en este punto cabe advertir que la falta de aviso a la entidad encargada no la exonera de responsabilidad.]*

No obstante, en este proceso no existen pruebas que determinen las condiciones y/o circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, por lo que no es posible predicar responsabilidad en cabeza del Municipio. Recordemos que en asuntos de idéntica naturaleza al que se debate en este proceso, y que en un todo resultan ser semejantes, el Consejo de Estado, ha afirmado que no es suficiente demostrar que la vía se encontraba en mal estado y/o que la administración había incurrido en alguna omisión frente a sus obligaciones, pues para endilgar responsabilidad, sino que es menester acreditar fehacientemente que existe un nexo causal entre dicha falla y el daño antijurídico que se alega en la demanda.<sup>1</sup>

### 3. Aspectos probatorios.

Si bien en esta etapa procesal lo adecuado es realizar una relación de aspectos probados en el proceso, también es cierto que brilla por su ausencia un material probatorio que acredite la causación de un daño y un nexo de causalidad entre un supuesto mal estado de la vía y el daño deprecado en la demanda. Por ello, resaltaré los siguientes puntos que reforzarán la anterior afirmación, así:

- No existe un informe de tránsito que dé cuenta de la presencia de huecos en la vía donde habrían ocurrido los hechos y brilla por su ausencia un concepto pericial o de un agente de tránsito en donde se plasme la causa generadora del daño o, si quiera, una hipótesis del supuesto accidente, la relación de la persona involucrada en el hecho y sus datos generales y demás.
- No existe un documento emanado de un empleador en virtud del cual pueda desprenderse o, si quiera, presumir, que la demandante habría sido despedida de su trabajo producto del supuesto accidente y sus incapacidades. Además, en caso de que el mismo existiere, aquel acto habría sido un despido ilegal y es improcedente acceder a una indemnización por este concepto pues ello representaría endilgar un perjuicio a quien no está llamado a responder por el mismo, generando una indemnización sin fundamento que debió ser del resorte de la jurisdicción laboral y que en todo caso debió estar protegida por las reglas de la estabilidad laboral reforzada.
- En relación con el anterior punto, además de no existir un documento que acredite un despido por la causa que alega la señora Valeria Zúñiga, sus afirmaciones resultan ser ajenas a la realidad y resulta evidente su intención de obtener, desmedidamente, una indemnización pues, como se acreditó en la contestación de la demanda, del sistema ADRES se desprende que la demandante figura como cotizante y en el régimen contributivo desde el 1 de febrero de 2022, lo que, de entrada, desvirtúa tanto los hechos narrados como las pretensiones de la demanda.

---

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sentencia del 11 de mayo de 2006, Consejero ponente: **RAMIRO SAAVEDRA BECERRA**, expediente No. 15042.

- Si bien es cierto la parte actora aportó una serie de fotografías, las mismas no tienen vocación probatoria pues no existe la certeza sobre la persona que las tomó, así como tampoco existe certeza del sitio y hora en que fueron obtenidas, de tal forma que aquellas imágenes no otorgan certeza probatoria sobre los hechos de la demanda. Lo anterior conforme las voces del Consejo de Estado en providencia donde fijó una subregla para valorar las fotografías que se aporten en los procesos judiciales.
- A pesar del argumento anterior, una simple vista de las fotografías no permite inferir que el supuesto hueco hubiera estado ubicado en la dirección relatada en la demanda, tampoco que las fotografías hubieren sido capturadas en agosto 01 de 2022, antes o después. Las imágenes donde se ven una serie de heridas no permiten concluir que la humanidad afectada hubiera sido la de la demandante pues ni siquiera se logra apreciar la cara de Valeria Zúñiga Valencia.
- Existe una imposibilidad de cuantificar el daño y de este modo proceder con su indemnización pues no existe una pérdida de capacidad laboral dictaminada por una entidad habilitada para ello y es que la prueba fue desistida por la parte actora en la audiencia inicial a pesar de que el Juez, procurando brindar primacía al derecho de acceso a la justicia antes que a aspectos formales o procesales, le brindó la oportunidad a la demandante para corregir su petición probatoria. En ese orden de cosas, los eventuales perjuicios tanto de índole material como inmaterial resultan inexistentes e imposibles de cuantificar tornando en improcedente su reconocimiento.

Termino mi intervención concluyendo que en tanto no se estructuró la responsabilidad de nuestro asegurado, no nació la obligación de indemnizar a cargo de mi representada y, si el Despacho llegare a considerar lo contrario, ruego al Juzgador tener en cuenta los límites indemnizatorios de la póliza, así como la imposibilidad de condenar solidariamente a las coaseguradoras en la medida en que la figura del coaseguro implica una participación en la asunción del riesgo y distribución de este.

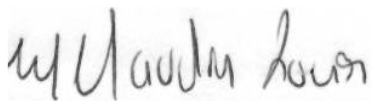
### **PETICIÓN**

Ruego al Despacho declarar probadas las excepciones formuladas por mi mandante en contra de la demanda y del llamamiento en garantía y declarar la inexistencia de una obligación indemnizatoria a cargo de la parte pasiva de esta acción en particular las de:

- 1. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. COMO QUIERA QUE NO SE ESTRUCTURÓ LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO (MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI)**
- 2. COASEGURO E INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS**

**3. AMPAROS OTORGADOS, LÍMITES INDEMNIZATORIOS, EXCLUSIONES Y DEDUCIBLES PACTADOS.**

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Maria Claudia Romero Lenis', written in a cursive style.

**MARIA CLAUDIA ROMERO LENIS**

C.C. N° 38.873.416 de Buga.

T.P. N° 83.061 del C. S. de la J.